



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-010-2022-00203-01
Demandante:	Carlos Alberto Cárdenas Botero
Demandado:	Colpensiones y Protección S.A
Asunto:	Apelación y Consulta
Procedencia:	Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, abril veinticinco (25) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de febrero de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS BOTERO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

Calle 14 No.48-32. Edificio Horacio Montoya Gil. Medellín -Antioquia

COLPENSIONES y la ADMISNITRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Radicado 05001-31-05-010-2022-00203-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor CARLOS ALBERTO CARDENAS BOTERO, convocó a juicio a COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional con destino a Protección S.A; se declare que la afiliación al Régimen de Prima Media ha sido continua e ininterrumpida y se declare que se le causó un perjuicio por parte de Protección S.A., como consecuencia de lo anterior, se ordene a Protección S.A., remita con destino a Colpensiones, todo el dinero que ha recibido desde que se dio la afiliación, esto es, cotizaciones, rendimientos, lo descontado a garantía de pensión mínima, cuotas o gastos de administración, seguros, reaseguros y cualquier otro concepto, traslado que se harpa previa indexación de cada concepto; asimismo, se ordene a Colpensiones reciba los dineros y reactive la afiliación, sin solución de continuidad, finalmente, se condene a Protección S.A., al pago de los perjuicios.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que el señor Carlos Alberto Cárdenas Botero, nació el 15 de febrero de 1964, que inició su afiliación al Sistema General de Seguridad a través del ISS a partir del 22 de agosto de 1994, entidad para la cual prestó servicios hasta el mes de septiembre de 2004, señalando que desconoce el actor las razones por las cuales fue afiliado a Protección S.A., pues no recibió ninguna asesoría, ni suscribió formulario con dicha finalidad, efectuando las cotizaciones con el convencimiento de estarlas realizando al ISS y luego Colpensiones y que no recibió reasesoria con antelación al cumplimiento de los 52 años de edad.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, aceptando como cierta la fecha de nacimiento del actor, la afiliación al ISS siendo la última cotización en el mes de septiembre de 2004 con el empleador Instituto de Seguro Social, mencionando no constarle los demás hechos de la demanda por tratarse de situaciones ajenas a la entidad.

En oposición a las súplicas de la demanda propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia del traslado de régimen; inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado a la AFP Protección S.A.; inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP Protección ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el Régimen de Prima Media; devolución de aportes debidamente indexados; devolución de cuotas de administración debidamente indexadas; buena fe; prescripción; excepción innominada; imposibilidad de condena en costas y enriquecimiento sin causa.

Por su parte, **PROTECCIÓN S.A.**, sostuvo que no es cierto lo narrado en relación a la afiliación del demandante a dicha entidad, toda vez que conforme al formulario de afiliación, el demandante suscribió dicho documento manifestando la voluntad de querer pertenecer al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sosteniendo que al actor se le puso de presente toda la información debida y necesaria sobre las características propias del Régimen de Ahorro Individual y su funcionamiento, es decir, que se le brindó una asesoría completa.

Para contrarrestar el éxito de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción;

aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones; innominada o genérica; inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia, de la afiliación por falta de causa y porque por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo proferido el 20 de febrero de 2023, por medio del cual declaró ineficaz el cambio de régimen pensional realizado por el señor Carlos Alberto Cárdenas Botero al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, declarando que el actor ha permanecido afiliado sin solución de continuidad al RPM administrado por Colpensiones; condenó a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del demandante, con sus correspondientes rendimientos financieros, frutos e intereses y el bono pensional si fue redimido. Igualmente, y con indexación trasladará en el mismo término, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros. Al momento de cumplirse estas órdenes, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen; condenó Colpensiones a recibir de Protección S.A, los valores aludidos, e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral, cotizaciones que habrán de tenerse como semanas válidamente cotizada; absolvió a Protección S.A., de la pretensión encaminada al reconocimiento de la indemnización por perjuicios y condenó en costas a Protección S.A.

1.4. RECURSO DE APELACION

Colpensiones

Interpone el recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia, por considerar que no existe material probatorio suficiente que dé cuenta de una suplantación firma o de una rúbrica impuesta sin consentimiento del demandante, no siendo posible avizorar siquiera sumariamente algún inicio de trámite penal, administrativo o de otra actuación que el demandante podía desplegar para solucionar dicha situación y en razón de ello, este proceso no es el indicado para solicitar las pretensiones que se demandan.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de Colpensiones, quien solicita que el evento en que se considere procedente la confirmación del fallo de primera instancia, se tenga en cuenta que los Decretos 663 de 1993, 692 y 720 de 1994, fundantes de los parámetros que direccionan el actuar de los fondos privados, otorgan responsabilidades exclusivamente a cargo del fondo y no de Colpensiones, por lo que es necesario cambiar el esquema de responsabilidad que endilga la carga económica en un 100% a Colpensiones, pues ello transgrede directamente el principio de sostenibilidad financiera, legalidad y confianza legítima del sistema, toda vez que, Colpensiones no tiene la obligación de soportar cargas que fueron creadas por la desatención de las obligaciones del fondo privado.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Carlos Alberto Cárdenas Botero nació el 15 de febrero de 1964, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folios 12 del anexo 03 del expediente digital.
- Que el demandante se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A., 1º de abril del año 2005, con fecha de efectividad del 1º de junio de la misma anualidad, conforme al formulario de vinculación glosado a folio 38 del anexo 13 del expediente digital.

- Que el pretensor acredita 1253.71 semanas cotizadas conforme a la historia laboral generada por Protección S.A., el 21 de julio de 2022, visible a folios 56 a 68 del anexo 13 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta proferida en el presente proceso por el señor Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, determinando si es ineficaz el traslado al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, administrado por Protección S.A., efectuado por el demandante el 1º de abril del año 2005?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto de traslado por incumplimiento del deber de información y como consecuencia de la declaratoria de ineficacia, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria del demandante, razón por la cual deberá confirmarse la sentencia de primera instancia.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen

público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12).

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la Ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos “*la selección de uno cualquiera de los*

regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021, SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022, SL1637 del 11 de mayo de 2022 y más recientemente en las sentencias, SL113 del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria

laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional del señor Carlos Alberto Cárdenas Botero, a través de la AFP Protección S.A., el 1º de abril del año 2005, con fecha de efectividad del 1º de junio de la misma anualidad, tal y como se desprende del formulario de vinculación glosados a folio 38 del anexo 13 del expediente digital, no obstante, dicho formulario no da cuenta de la información que fue brindada al accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado” (sentencia SL3871 de 2021);* por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Del interrogatorio de parte practicado al demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que el mismo indicó, en relación al traslado de régimen, que en ningún momento se trasladó, que trabajó con el Seguro Social más de 12 años, que se fue para Estados Unidos y siguió haciendo los aportes como trabajador independiente, pero en Colpensiones, afirmando que enviaba el dinero a un familiar que le hacía las vueltas en Colombia y él le pagaba normal, que nunca se enteró, ni conoció a nadie de Protección S.A., ni le entregaron formulario, aunque reconoce su firma en el formulario, sostuvo que no sabe quién pudo haber hecho eso, manifestando que una vez le robaron el

documento de identidad en Estados Unidos y que para la fecha que aparece en el formulario, ya se encontraba en Estados Unidos.

No advierte esta Colegiatura la existencia de medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada del afiliado, sobre las implicaciones del traslado y en tal escenario probatorio, ante la ausencia de dichos medios de prueba no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, tal y como lo declaró el a quo.

Destacando la Sala, que es precisamente la falta de acreditación del cumplimiento al deber de información, el fundamento por el cual se declaró la ineficacia de la afiliación y no el desconocimiento del demandante de la suscripción del formulario de afiliación, razón por la cual no es de recibo el planteamiento esbozado por el apoderado de Colpensiones en la sustentación del recurso de alzada.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización del demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la pensión del actor.

Lo anterior, por cuanto no puede afectarse, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información, y siendo esta la entidad en la cual continua activa la afiliación del gestor del proceso, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación del pretensor, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual del demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

Criterio reafirmado en la sentencia SL 3034 de 2021, en la cual sobre el punto se indicó:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en

el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

Sobre la indexación

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, debe ser un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, razón por la cual resulta procedente la condena por este concepto.

Así las cosas, la orden de traslado impartida por el fallador primario, se encuentra totalmente ajustada a los anteriores criterios, por lo que deberá confirmarse íntegramente la sentencia

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y en favor del demandante, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3.- DECISIÓN

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:


1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Circuito de Medellín, el 20 de febrero de 2023, en el proceso ordinario instaurado por el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS BOTERO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la ADMISNITRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

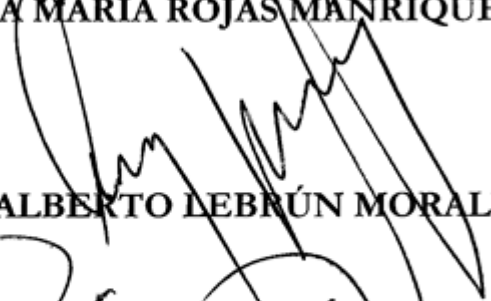
2.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

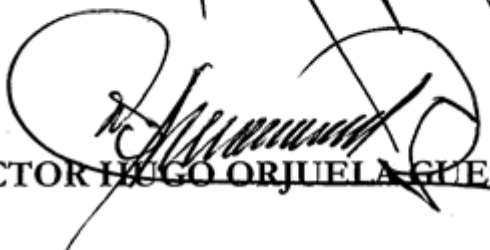
3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO